



IÑIGO
ARBIOL

DIRECTOR
DEL MÁSTER
EN RELACIONES
INTERNACIONALES Y
DIPLOMACIA EMPRESARIAL

UN CAMBIO DE ERA

La creciente interconexión del mundo ha llevado a un sistema global más complejo e interdependiente en el que se da una compleja confluencia de nuevos y viejos desafíos. Por un lado, existe un conjunto de desafíos clásicos renovados por la guerra en Ucrania y otros fenómenos, que identificamos como urgentes y que nos apelan a dotarnos de soluciones inmediatas y a corto plazo. Por otro, multitud de stakeholders públicos y privados nos interpelan a prestar atención a un conjunto de desafíos menos inmediatos pero más importantes que nos desafían como sociedad a medio y largo plazo. Sin duda, podemos decir que esta confluencia está generando movimientos tectónicos que tensionan las relaciones internacionales y complejizan la generación de consensos desde los que dar respuestas conjuntas y participadas. En particular, las diversas crisis económicas, políticas y sociales que hemos vivido las democracias occidentales hacen que éstas estén especialmente mal preparadas para dar una respuesta eficaz.

En cuanto a los desafíos urgentes de corto plazo, las tradicionales amenazas de seguridad se han visto complejizadas por el retorno de la interpretación geopolítica clásica en la que las relaciones internacionales se interpretan como una lucha por los recursos y el territorio etc. Es decir, una geopolítica ligada a elementos clave de un modelo de crecimiento cortoplacista y caduco. Estos desafíos enfrentan a los estados entre sí, como demuestra la guerra encubierta entre Estados Unidos y China que está cambiando el equilibrio de poder en el mundo y disputando la realidad del denominado orden liberal internacional. Estos desafíos son geopolíticos son además entendidos como una

suma cero (para que unos ganen otros tienen que perder), algo que favorece actitudes agresivas y lógicas de relación estado-estado que no pueden ni quieren cooperar entre sí, sino competir. Esta realidad dificulta que la comunidad internacional trabaje multilateralmente para abordar desafíos globales como el cambio climático, las pandemias y la reducción de la pobreza y en su lugar se adopte un enfoque confrontacional que socava los esfuerzos por encontrar soluciones comunes a los desafíos globales así como la credibilidad de los acuerdos y normas internacionales.

Por otro lado, existe un conjunto de desafíos a medio y largo plazo que trascienden el plano estado-estado y cuya relevancia y trascendencia es muy superior a los urgentes. Con toda probabilidad, el cambio climático representa el ejemplo paradigmático pero junto a él se encuentran la promoción y protección de los derechos humanos, las pandemias y los retos de salud global, la seguridad alimentaria o la desigualdad que amenaza con romper el contrato social tanto en países con economías desarrolladas como en los que aún se encuentran en fases de desarrollo. Estos desafíos se caracterizan por ser más sistémicos y menos geopolíticos, y se encuentran en un espacio de acción política donde la gobernanza global puede ser más efectiva y donde la simbiosis de la cooperación es evidente.

La confluencia de desafíos nos traslada a una transición desde un mundo VUCA (volátil, incierto, complejo y ambiguo) hacia un mundo BANI (frágil, ansioso, no lineal e incomprensible) que podríamos decir supone, más allá de una era de cambios, un auténtico cambio de era.



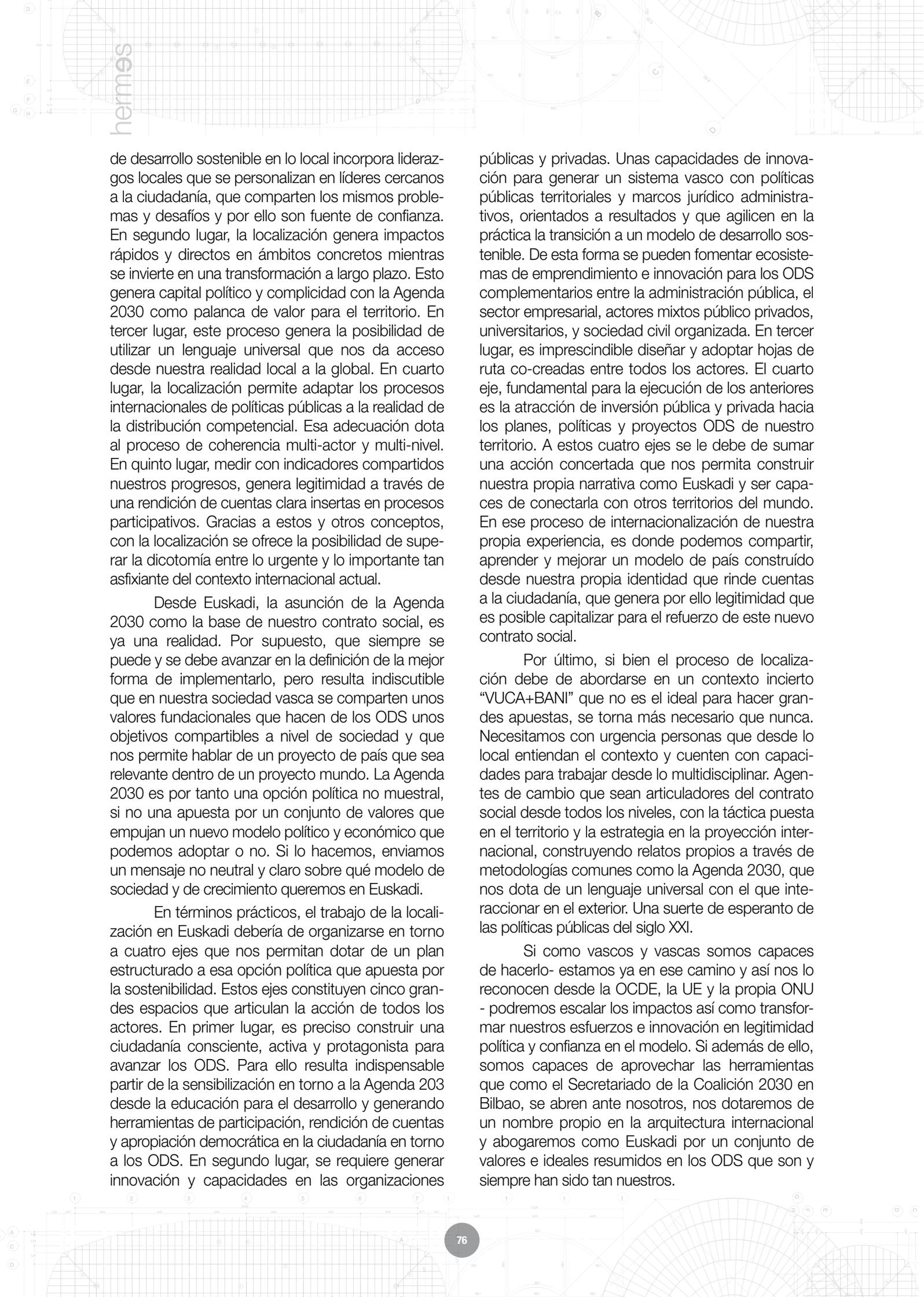
A este complejo escenario descrito se le suma la crisis de un modelo político-económico que se ha centrado en el crecimiento lineal; políticamente liberal por inspiración de las revoluciones liberales de finales del XVIII y económicamente nacido tras la transformación radical post-Revolución Industrial. Este modelo ha preferido evitar la reflexión sobre la complejidad del significado del crecimiento mismo, ignorando imprudentemente sus impactos económicos, sociales, y como no, medioambientales. En un plano económico, durante más de cuarenta años de globalización, se han gobernado las relaciones internacionales con la métrica situada en lo macroeconómico, generando profundas brechas de desigualdad inter e intra-estatales. Numerosos académicos han abordado la naturaleza de este modelo y propuesto alternativas que van desde las teorías del de-crecimiento hasta las que sitúan la transición en base al triple reto. En cualquier caso, estas revisiones críticas nos proponen dejar atrás ese modelo cortoplacista y lineal, que no es capaz de crecer vertical y horizontalmente a un mismo tiempo y por tanto genera tremendas desigualdades. En el plano político, las fallas de este sistema han alentado un creciente desencanto hacia el modelo de democracia liberal occidental que continúa creciendo. En consecuencia, el orden liberal internacional se pone en tela de juicio particularmente en aquellas sociedades donde las consecuencias de siglos de colonialismo y relaciones desiguales han incidido más. Esa desafección se profundiza hoy hasta cuestionar los valores fundacionales del modelo y así, cuestiones como el estado de derecho, los derechos humanos o la democracia que parecían incuestionables, son puestas en cuestión.

Para ello, se presenta una alternativa, representada por la Agenda 2030, que ofrece una hoja de ruta a largo plazo basada en la transición hacia un mundo sostenible, justo e inclusivo. No cabe duda de que en esa transición entre modelos, tanto en el plano político como económico, se están generando resistencias por parte de sectores que no creen en la posibilidad de una transición pactada multi-actor. Esta recibe el apoyo de actores contrarios al cambio y tratan, cada vez de forma más abierta y desafiante, de ralentizar el cambio de modelo representado por la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Es por ello, que la Agenda 2030 no puede ser considerada una opción neutral, sino que se trata de una opción política consciente a partir de la cual construir un nuevo contrato social basado en la sostenibilidad.

Inspirada por la conferencia conocida como Río+20 de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas abordó de forma consensuada la necesaria revisión de un modelo exhausto adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 2030. Como tal, la agenda debe de ser entendida como un plan integral para erradicar la pobreza, proteger el planeta y promover la prosperidad con una clara hoja de ruta que implica a toda la ciudadanía en todos los territorios a un mismo tiempo. Como se apuntaba en la descripción de los desafíos, desde 2015, la realidad de las relaciones internacionales se ha tornado aún más compleja, y en el ecuador del período dado los datos nos ofrecen un panorama poco alentador. Como sociedad global, nos estamos quedando atrás en la adopción de medidas y nos arriesgamos a afrontar consecuencias catastróficas e irreversibles, pero esto no desvirtúa la validez de la agenda si no que nos debe hacer pensar sobre la mejor forma posible de orientar nuestras acciones, y en particular, las de los poderes públicos, para el éxito de la misma. La Agenda 2030, frente a negacionistas y catastrofistas, es aún el mejor marco posible con una taxonomía y un lenguaje universal que puede permitirnos avanzar en la colaboración desde realidades muy diversas, tanto por la naturaleza de los actores como por sus geografías.

Además de disponer de una hoja de ruta como la Agenda 2030 que nos marque el camino a seguir, en un cambio de era donde confluyen desafíos en los planos económico y político, la transición hacia un mundo sostenible y justo pasa por construir el desarrollo sostenible desde los territorios. Precisamos una nueva clave que supere unas relaciones internacionales dominadas por los estados, incorporando de forma inmediata y masiva a los gobiernos subestatales. Por un lado, los gobiernos locales y regionales son agentes públicos clave para el diseño y ejecución de estrategias y políticas en cuestiones tales como la participación ciudadana, la política fiscal, la igualdad, el urbanismo o la gestión integral del medio ambiente. Por otro lado, si bien no es posible transitar hacia un nuevo modelo sin los estados, desde luego tampoco lo es sólo con los estados. La localización, es decir un contrato social desde lo local inspirado en los ODS, es por tanto un elemento indispensable para el futuro de nuestras sociedades.

En ese contrato social inspirado desde lo local, el proceso de localización, se justifica gracias a al menos cinco conceptos clave. En primer lugar, este proceso de incorporar la agenda global



de desarrollo sostenible en lo local incorpora liderazgos locales que se personalizan en líderes cercanos a la ciudadanía, que comparten los mismos problemas y desafíos y por ello son fuente de confianza. En segundo lugar, la localización genera impactos rápidos y directos en ámbitos concretos mientras se invierte en una transformación a largo plazo. Esto genera capital político y complicidad con la Agenda 2030 como palanca de valor para el territorio. En tercer lugar, este proceso genera la posibilidad de utilizar un lenguaje universal que nos da acceso desde nuestra realidad local a la global. En cuarto lugar, la localización permite adaptar los procesos internacionales de políticas públicas a la realidad de la distribución competencial. Esa adecuación dota al proceso de coherencia multi-actor y multi-nivel. En quinto lugar, medir con indicadores compartidos nuestros progresos, genera legitimidad a través de una rendición de cuentas clara insertas en procesos participativos. Gracias a estos y otros conceptos, con la localización se ofrece la posibilidad de superar la dicotomía entre lo urgente y lo importante tan asfixiante del contexto internacional actual.

Desde Euskadi, la asunción de la Agenda 2030 como la base de nuestro contrato social, es ya una realidad. Por supuesto, que siempre se puede y se debe avanzar en la definición de la mejor forma de implementarlo, pero resulta indiscutible que en nuestra sociedad vasca se comparten unos valores fundacionales que hacen de los ODS unos objetivos compartibles a nivel de sociedad y que nos permite hablar de un proyecto de país que sea relevante dentro de un proyecto mundo. La Agenda 2030 es por tanto una opción política no muestral, si no una apuesta por un conjunto de valores que empujan un nuevo modelo político y económico que podemos adoptar o no. Si lo hacemos, enviamos un mensaje no neutral y claro sobre qué modelo de sociedad y de crecimiento queremos en Euskadi.

En términos prácticos, el trabajo de la localización en Euskadi debería de organizarse en torno a cuatro ejes que nos permitan dotar de un plan estructurado a esa opción política que apuesta por la sostenibilidad. Estos ejes constituyen cinco grandes espacios que articulan la acción de todos los actores. En primer lugar, es preciso construir una ciudadanía consciente, activa y protagonista para avanzar los ODS. Para ello resulta indispensable partir de la sensibilización en torno a la Agenda 203 desde la educación para el desarrollo y generando herramientas de participación, rendición de cuentas y apropiación democrática en la ciudadanía en torno a los ODS. En segundo lugar, se requiere generar innovación y capacidades en las organizaciones

públicas y privadas. Unas capacidades de innovación para generar un sistema vasco con políticas públicas territoriales y marcos jurídico administrativos, orientados a resultados y que agilicen en la práctica la transición a un modelo de desarrollo sostenible. De esta forma se pueden fomentar ecosistemas de emprendimiento e innovación para los ODS complementarios entre la administración pública, el sector empresarial, actores mixtos público privados, universitarios, y sociedad civil organizada. En tercer lugar, es imprescindible diseñar y adoptar hojas de ruta co-creadas entre todos los actores. El cuarto eje, fundamental para la ejecución de los anteriores es la atracción de inversión pública y privada hacia los planes, políticas y proyectos ODS de nuestro territorio. A estos cuatro ejes se le debe de sumar una acción concertada que nos permita construir nuestra propia narrativa como Euskadi y ser capaces de conectarla con otros territorios del mundo. En ese proceso de internacionalización de nuestra propia experiencia, es donde podemos compartir, aprender y mejorar un modelo de país construido desde nuestra propia identidad que rinde cuentas a la ciudadanía, que genera por ello legitimidad que es posible capitalizar para el refuerzo de este nuevo contrato social.

Por último, si bien el proceso de localización debe de abordarse en un contexto incierto "VUCA+BANI" que no es el ideal para hacer grandes apuestas, se torna más necesario que nunca. Necesitamos con urgencia personas que desde lo local entiendan el contexto y cuenten con capacidades para trabajar desde lo multidisciplinar. Agentes de cambio que sean articuladores del contrato social desde todos los niveles, con la táctica puesta en el territorio y la estrategia en la proyección internacional, construyendo relatos propios a través de metodologías comunes como la Agenda 2030, que nos dota de un lenguaje universal con el que interaccionar en el exterior. Una suerte de esperanto de las políticas públicas del siglo XXI.

Si como vascos y vascas somos capaces de hacerlo- estamos ya en ese camino y así nos lo reconocen desde la OCDE, la UE y la propia ONU - podremos escalar los impactos así como transformar nuestros esfuerzos e innovación en legitimidad política y confianza en el modelo. Si además de ello, somos capaces de aprovechar las herramientas que como el Secretariado de la Coalición 2030 en Bilbao, se abren ante nosotros, nos dotaremos de un nombre propio en la arquitectura internacional y abogaremos como Euskadi por un conjunto de valores e ideales resumidos en los ODS que son y siempre han sido tan nuestros.

euskaraz
bizi
hahi dut

